



Asamblea General

Distr. general
18 de julio de 2022
Español
Original: inglés

Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 113 del programa provisional*

Medidas para eliminar el terrorismo internacional

Medidas para eliminar el terrorismo internacional

Informe del Secretario General

Resumen

El presente informe se ha preparado de conformidad con el párrafo 8 de la resolución [50/53](#) de la Asamblea General, leído conjuntamente con la resolución [76/121](#) de la Asamblea sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. En las secciones II.A y II.B del informe se consignan las medidas adoptadas a nivel nacional e internacional, sobre la base de las comunicaciones de Gobiernos y organizaciones internacionales. La sección III contiene una lista de los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes.

* [A/77/150](#).



I. Introducción

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con el párrafo 8 de la resolución [50/53](#) de la Asamblea General, leído conjuntamente con el párrafo 24 de la resolución [76/121](#) de la Asamblea sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional.
2. Se pidió a los Estados que presentaran, antes del 1 de junio de 2022, información sobre la aplicación del párrafo 10 a) y b) de la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional, que figura en el anexo de la resolución [49/60](#) de la Asamblea General, y se les advirtió de que las comunicaciones presentadas con retraso se incluirían en el siguiente ciclo de presentación de informes, según procediera. La sección II.A contiene un resumen de las respuestas recibidas. Si corresponde, se hace referencia a las comunicaciones anteriores recibidas de los Estados Miembros desde 2015; no se indican los Estados Miembros que no han presentado comunicaciones desde 2015.
3. También se invitó a los organismos especializados y a otras organizaciones internacionales que correspondiera a presentar, antes del 1 de junio de 2022, información u otro material pertinente sobre la aplicación del párrafo 10 a) de la Declaración. La sección II.B contiene un resumen de las respuestas recibidas.
4. Los resúmenes de las respuestas se refieren a las cuestiones mencionadas en el párrafo 10 a) y b) de la Declaración, a saber: a) la recopilación de datos acerca del estado y la aplicación de los acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales vigentes que se refieren al terrorismo internacional, que incluya información relativa a incidentes causados por el terrorismo internacional y a procesos y condenas penales; y b) las leyes y normas nacionales relativas a la prevención y la represión del terrorismo internacional en todas sus formas y manifestaciones. Los textos completos de las respuestas recibidas, incluidas las recibidas después del 1 de junio de 2022, se pueden consultar en el sitio web de la Sexta Comisión de la Asamblea General¹.

II. Medidas adoptadas a nivel nacional e internacional en materia de prevención y represión del terrorismo internacional e información sobre incidentes causados por el terrorismo internacional

A. Información recibida de Estados Miembros

Argelia

5. Además de la información facilitada anteriormente ([A/73/125](#), párrs. 5 a 7, [A/74/151](#), párrs. 5 a 7, [A/75/176](#), párrs. 5 a 7, y [A/76/201](#), párrs. 5 y 6), Argelia comunicó que había tomado importantes iniciativas para dar efecto a las resoluciones del Consejo de Seguridad [1373 \(2001\)](#), [2178 \(2014\)](#) y [2199 \(2015\)](#).
6. Argelia había introducido enmiendas en la legislación contra el terrorismo. Por ejemplo, además de las modificaciones del Código Penal que se habían comunicado anteriormente, la Ordenanza 21-08 de 8 de junio de 2021 había complementado el artículo 87 *bis* que regulaba el crimen de terrorismo y establecía disposiciones para que el Gobierno de Argelia confeccionase una lista nacional de personas y entidades culpables de esos crímenes. El proceso de preparación de la lista estaba regulado además por el Decreto Ejecutivo núm. 21-384, de 7 de octubre de 2021. Por otra parte,

¹ www.un.org/en/ga/sixth.

el Código de Procedimiento Penal había sido complementado por la Ordenanza núm. 21-II, de 25 de agosto de 2021, por la que se creaba una unidad penal nacional especializada en la sede de la Corte de Argel y se añadían al Código las siguientes disposiciones: artículos 2II *bis* 22, 2II *bis* 23, 2II *bis* 24, 2II *bis* 25, 2II *bis* 26, 2II *bis* 27, 2II *bis* 28 y 2II *bis* 29. Argelia también había promulgado legislación acerca del control judicial sobre la utilización por los servicios de seguridad de técnicas especiales de investigación y sobre medidas legales específicas relativas a la custodia policial y la detención preventiva en casos de terrorismo.

7. En el ámbito de la financiación del terrorismo, el Decreto Ejecutivo núm. 22-36, de 4 de enero de 2022, había establecido un nuevo estatuto para la Unidad de Procesamiento de Inteligencia Financiera, en que se enunciaban nuevas normas institucionales y se consolidaba la independencia de la Unidad. Desde la promulgación de ese decreto, se habían publicado en el sitio web de la Unidad las órdenes de congelación e incautación inmediata, dictadas por el Ministro de Hacienda, de los fondos de las personas, grupos y entidades que figuraban en las listas del Consejo de Seguridad. Por otra parte, el Decreto Ejecutivo núm. 20-398, de 26 de diciembre de 2020, que entró en vigor el 1 de marzo de 2021, había creado el Comité Nacional de Evaluación de los Riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y establecido su cometido, organización y funcionamiento.

8. En cuanto a la legislación sobre aviación, Argelia había incorporado el anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional a su legislación nacional e iniciado el proceso de promulgar un marco normativo para la creación de una unidad de información sobre los pasajeros, de resultas de lo cual las compañías aéreas tendrían que comunicar con antelación la información sobre los pasajeros a las autoridades nacionales competentes. Por Decreto Presidencial núm. 21-351, de 13 de septiembre de 2021, se había establecido un sistema nacional de procesamiento de información sobre pasajeros.

Argentina

9. Además de la información facilitada anteriormente ([A/74/151](#), párrs. 8 a 10), la Argentina comunicó que se encontraba inmersa en el proceso de ratificación del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil y el Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.

10. La Argentina había incorporado sistemáticamente la lista de sanciones del Consejo de Seguridad a su registro público nacional de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a la financiación de este, junto a los acusados o culpables de delitos relacionados con el terrorismo y los sujetos a la congelación de fondos o activos financieros.

11. La Argentina no había registrado ningún proceso penal por el delito de terrorismo definido en el artículo 41 *quinquies* del Código Penal.

Armenia

12. Además de la información facilitada anteriormente ([A/71/182](#), párrs. 11 a 17, [A/74/151](#), párrs. 11 a 15, [A/75/176](#), párrs. 5 a 7, y [A/76/201](#), párrs. 7 a 10), Armenia comunicó que era miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro.

13. En relación con el caso anteriormente comunicado del líder de la Brigada Suleyman Shah, las investigaciones preliminares de la causa penal relativa al atentado en gran escala contra Artsaj que había tenido lugar el 27 de septiembre de 2020 habían

indicado que otros 31 combatientes terroristas extranjeros, ciudadanos de la República Árabe Siria, habían cometido crímenes de guerra y atentados terroristas. En consecuencia, esas personas habían sido declaradas personas buscadas internacionalmente.

14. Armenia había venido dando efecto automáticamente a las designaciones hechas por el Consejo de Seguridad. En abril de 2022, había 341 personas y 13 entidades incluidas en la lista nacional de personas o entidades implicadas en actividades terroristas, confeccionada con arreglo a la resolución [1373 \(2001\)](#) del Consejo de Seguridad.

15. En 2021, Armenia había efectuado una evaluación nacional de los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo en el país para el período 2017-2020. El 18 de octubre, la evaluación había sido aprobada por el Comité Permanente de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación.

Canadá

16. Además de la información que ya había proporcionado ([A/60/228](#), párrs. 27 a 29), el Canadá comunicó que había firmado, ratificado y puesto en vigor 13 instrumentos contra el terrorismo. En 2013, por la Ley de Lucha contra el Terrorismo se había enmendado el Código Penal para tipificar como delito el hecho de salir o intentar salir del Canadá para cometer ciertos delitos de terrorismo.

17. Desde la aprobación de la Ley Antiterrorista de 2001, 64 personas habían sido acusadas de delitos de terrorismo en virtud del Código Penal. Hasta mayo de 2022, 14 personas habían sido acusadas de delitos de terrorismo relacionados con los viajes. De ellas, seis habían sido condenadas y dos absueltas, se habían retirado los cargos contra una y se habían suspendido los cargos contra otra y cuatro tenían órdenes de detención pendientes. Otras dos personas habían sido acusadas de delitos en virtud de otra disposición sobre terrorismo del Código Penal y las causas seguían sustanciándose ante un tribunal. Uno de los acusados se había declarado culpable y estaba en espera de que se dictara sentencia.

18. El Canadá, a través de su política exterior feminista, había tratado de promover los derechos humanos y la igualdad de género con medidas continuas, coordinadas y en las que participaba todo el Gobierno. Por ejemplo, al estudiar cómo luchar contra el terrorismo y prevenir la radicalización, el Canadá estaba utilizando protocolos de análisis de género y otros instrumentos destinados a incorporar objetivos específicos de igualdad de género en sus actividades en todo el mundo.

Colombia

19. Además de la información facilitada anteriormente ([A/69/209](#), párrs. 6 a 10, [A/70/211](#), párrs. 12 a 15, [A/72/111](#), párrs. 12 y 13, [A/75/176](#), párrs. 24 a 30, y [A/76/201](#), párrs. 17 a 22), Colombia comunicó que la Policía Nacional había suscrito 15 acuerdos de cooperación internacional para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional con la Argentina, Austria, Chile, España, los Estados Unidos de América, Guatemala, Italia, Jamaica, Marruecos, México, el Paraguay, el Perú, la República de Corea y Trinidad y Tabago.

20. En el ámbito de la financiación del terrorismo, se había aprobado el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, antes conocido como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, mediante un memorando de entendimiento con representantes de los Gobiernos de los países de América del Sur. Este estaba dedicado a aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera mediante la realización de evaluaciones mutuas y la coordinación de la capacitación y la acción

educativa contra el blanqueo de capitales en la región. En 2006, Colombia había promulgado la Ley 1121 contra el terrorismo, por la que se regulaba la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y se dictaban otras disposiciones, entre las que se incluían los procedimientos relativos a las listas internacionales. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera se habían incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 1186 de 2009.

21. Colombia destacó la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de información de inteligencia. Atribuía la liberación de una ciudadana colombiana el 8 de octubre de 2021, que había sido secuestrada por la filial de Al-Qaida Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, a la coordinación y cooperación a nivel internacional a través del grupo de respuesta nacional a crisis internacionales.

22. Colombia era miembro permanente del Foro Mundial contra el Terrorismo. Había participado en algunas de las iniciativas de los grupos de trabajo del Foro y en eventos de fortalecimiento de la capacidad. En 2021 había expedido un documento de política nacional que enunciaba medidas concretas para fortalecer la capacidad de Colombia a fin de prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

23. La Fiscalía General de la Nación había enumerado 88 actos terroristas cometidos en Colombia del 1 de enero de 2021 al 13 de mayo de 2022, de los cuales 43 se consideraban actos de terrorismo. En cuanto a la etapa procesal de los 43 casos, 40 se encontraban en etapa de indagación, dos en etapa de investigación y uno en juicio.

24. El Ministerio de Defensa Nacional había dictado la Resolución núm. 03872 del 19 de noviembre de 2021, por la que se adoptaban los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la Policía Nacional. Colombia reiteró su compromiso de fortalecer la respuesta institucional frente a toda forma de discriminación y a la violencia en razón del género para brindar una atención integral y oportuna a las víctimas del terrorismo.

Cuba

25. Además de la información facilitada anteriormente ([A/66/96](#), párrs. 17 a 19, [A/67/162](#), párrs. 10 y 11, [A/68/180](#), párrs. 12 a 15, [A/69/209](#), párrs. 11 a 15, [A/70/211](#), párrs. 16 a 21, [A/71/182](#), párrs. 27 a 31, [A/72/111](#), párrs. 14 a 17, [A/73/125](#), párrs. 13 a 16, [A/74/151](#), párrs. 35 a 39, [A/75/176](#), párrs. 31 a 40 y [A/76/201](#), párrs. 23 a 28), Cuba comunicó que era parte en los 19 convenios internacionales contra el terrorismo y que había suscrito el Código de Conducta para Lograr un Mundo Libre de Terrorismo en 2018 en la Sede de las Naciones Unidas, así como 13 memorandos de entendimiento con las unidades de inteligencia financiera de Bangladesh, Bélgica, Chile, Curasao, Grecia, Guinea Ecuatorial, el Japón, México, el Paraguay, Sudáfrica, Trinidad y Tabago, Viet Nam y la Santa Sede. En octubre de 2021, la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba había firmado con el Servicio Federal de Aduanas de Rusia un convenio de cooperación antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

26. Cuba proporcionó información detallada sobre los cambios legislativos que se habían instituido para consolidar y sistematizar el derecho penal nacional e incluir las disposiciones de los tratados internacionales ratificados sobre el terrorismo. El 1 de enero de 2022 había entrado en vigor la nueva Ley 143/2021 del Proceso Penal y el 15 de mayo de 2022 se había aprobado el nuevo Código Penal. El nuevo marco jurídico había ampliado la esfera de protección de bienes jurídicos que podían ser lesionados por actos de terrorismo y había establecido un procedimiento más

perfeccionado de investigación de dichos actos y de cooperación internacional. Además, todos los actos de terrorismo habían sido tipificados como delitos graves, con sanciones severas. El nuevo Código Penal había derogado otras leyes penales especiales, entre ellas la Ley núm. 93, de 20 de diciembre de 2001, contra actos de terrorismo, y los Decretos-Ley núm. 316/2013 y núm. 389/2019 sobre la lucha contra el terrorismo, de los que se había informado anteriormente. Se mantenían vigentes otras normas relevantes para enfrentar ese flagelo.

27. Para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad, se había dictado el Decreto Ley núm. 317, sobre la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, complementado y actualizado por el Decreto Ley núm. 361 del Banco Central, de 14 de septiembre de 2018.

28. Cuba había intensificado la cooperación judicial con otros países. A la fecha, se habían firmado 29 acuerdos de traslado de sancionados (24 en vigor), 27 en materia de extradición y 28 de asistencia jurídica con 25 países (27 en vigor). Las autoridades cubanas sostenían nexos de cooperación policial internacional. Se mantenían vínculos de cooperación con 36 servicios policiales extranjeros, así como con otros órganos de enfrentamiento e investigación criminal. Además, Cuba cooperaba activamente con la Organización Internacional de Policía Criminal, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

29. Igualmente, Cuba había actualizado la Estrategia Nacional Integral contra el Terrorismo y se había diseñado un Programa Especial de Atención a las Víctimas de Acciones Terroristas.

30. En 2020, cuatro acusados cubanos habían sido declarados culpables de causar temor y ejecutar actos de violencia.

Ecuador

31. Además de la información facilitada anteriormente (A/76/201, párrs. 33 a 36), el Ecuador facilitó una lista detallada de los procedimientos y las directrices establecidos para aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre sanciones financieras selectivas en relación con el terrorismo, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

32. Asimismo, el Ecuador proporcionó una descripción detallada del *modus operandi* de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y los procedimientos de cooperación con la Fiscalía General del Estado, y señaló que la Unidad remitía a la Fiscalía General del Estado, de manera escrita y reservada, los informes ejecutivos que ésta le solicitaba en relación con una investigación o proceso en curso sobre delitos de lavado de activos y financiamiento del delito.

33. Los procedimientos relativos a la congelación de fondos y activos de personas incluidas en la lista del Consejo de Seguridad estaban regulados por la resolución de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE-DG-2022-0095, de 21 de marzo de 2022, la resolución de la Fiscalía General del Estado 023-FGE-2022, de 18 de marzo de 2022, y la resolución del Consejo de la Judicatura núm. 066-2022, de 18 de marzo de 2022.

34. La Fiscalía General del Estado había creado en 2018 la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT); En marzo de 2022, con la ayuda del Banco Mundial, la Unidad de Análisis Financiero y Económico había llevado a cabo una evaluación del riesgo que suponían las organizaciones sin fines de lucro respecto de la financiación del

terrorismo e identificado ocho organizaciones de riesgo medio alto, que debían ser monitoreadas para contrarrestar el riesgo de financiación del terrorismo

35. Cabía mencionar que la Fiscalía General del Estado había abierto 158 investigaciones por el delito de terrorismo y cinco investigaciones por financiamiento del terrorismo.

36. Como medida preventiva e informativa para los sujetos obligados y la ciudadanía en general, la Unidad de Análisis Financiero y Económico AFE contaba en su página web con videos educativos relacionados con el terrorismo y su financiamiento y adicionalmente contaba con enlaces directos a los documentos de interés enfocados en este tema y las resoluciones que las autoridades competentes habían expedido, así como la guía básica de los procesos de congelamiento derivados de las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Salvador

37. Además de la información facilitada anteriormente ([A/67/162](#), párr. 15, [A/71/182](#), párrs. 32 a 34, [A/72/111](#), párrs. 21 y 22, [A/75/176](#), párrs. 51 a 54, y [A/76/201](#), párrs. 39 a 42), El Salvador comunicó que era miembro del Sistema de la Integración Centroamericana, del Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras de la secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana, del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, implementado a través de la Comisión de Seguridad del Sistema de la Integración Centroamericana, y del Plan Operativo Regional contra Armas de Fuego.

38. El Salvador había realizado recientemente una serie de reformas en las leyes y normativas para continuar con la lucha contra el terrorismo, entre las que se encontraban las siguientes: una enmienda publicada en el Diario Oficial núm. 65, tomo núm. 434, de 30 de marzo de 2022; unas pocas reformas del Código Penal, en particular el artículo 162, que establecía nuevos parámetros de la pena por delitos cometidos por miembros de agrupaciones terroristas; la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, que había sido modificada para establecer una nueva definición de las organizaciones terroristas (mediante norma publicada en el Diario Oficial núm. 65, tomo núm. 434); y la Ley de Recompensas y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, publicada en el Diario Oficial núm. 65, tomo 434, que establecía recompensas para quienes brindasen información que culmine en la captura de miembros de grupos terroristas.

Finlandia

39. Además de la información facilitada anteriormente ([A/60/228](#), párr. 48, [A/68/180](#), párrs. 16 y 17, [A/72/111](#), párrs. 23 y 24, y [A/73/125](#), párrs. 21 a 23), Finlandia proporcionó una lista de los 18 instrumentos de lucha contra el terrorismo que había firmado y ratificado e indicó cuál era el proceso de incorporación de los instrumentos internacionales a la legislación nacional.

40. Finlandia había enmendado el Código Penal el 1 de febrero de 2003 para tipificar en el capítulo 34 a) los delitos relacionados con el terrorismo. El capítulo abarcaba los delitos de terrorismo y su preparación, la dirección de un grupo terrorista, la promoción de un grupo terrorista, el adiestramiento para el terrorismo, el reclutamiento de miembros para grupos terroristas y la financiación del terrorismo. La definición de intención terrorista se fundaba en la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI).

41. Para poner en vigor las resoluciones del Consejo de Seguridad [2462 \(2019\)](#), sobre la prevención y represión de la financiación de actos terroristas, y [2482 \(2019\)](#),

sobre los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, Finlandia había modificado recientemente las disposiciones sobre financiación del terrorismo, que entraron en vigor el 15 de abril de 2021. En 2021 se habían aprobado otras enmiendas. Por ejemplo, la incitación pública relacionada con los delitos de terrorismo se había tipificado como delito separado y se había modificado la escala de penas para la financiación del terrorismo y el alcance de las actividades que comprendía.

Grecia

42. Además de la información facilitada anteriormente ([A/68/180](#), párrs. 18 a 21, [A/75/176](#), párrs. 55 a 58, y [A/76/201](#), párrs. 46 a 47), Grecia comunicó que había concertado 26 memorandos de entendimiento con organismos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley en el ámbito de la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero.

43. Grecia proporcionó una descripción detallada de las normas y los procedimientos de aplicación de la ley. La Ley núm. 4557 de 2018 regulaba la organización, las facultades y el funcionamiento de la Policía Helénica contra el Blanqueo de Dinero.

44. La Unidad Helénica de Inteligencia Financiera era el centro nacional de recogida, análisis y difusión de información sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Tenía acceso a los datos en poder del Gobierno y la autoridad para emitir órdenes de congelamiento temporal en casos urgentes, de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Ley 4557/2018, cuando se denunciase que una transacción o propiedad se utilizaba con fines de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo. La congelación o suspensión temporal también se ordenaría en las mismas condiciones cuando lo solicitase una autoridad correspondiente de otro Estado miembro de la Unión Europea.

45. En los años 2020 y 2021, no había tenido lugar en Grecia ningún incidente relacionado con el terrorismo nacional o internacional.

República Islámica del Irán

46. Además de la información facilitada anteriormente ([A/76/201](#), párrs. 48 a 50), la República Islámica del Irán comunicó que era parte en instrumentos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo, como la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil. Había concertado más de 50 acuerdos bilaterales de asistencia judicial recíproca y traslado de reclusos y otros acuerdos con Estados para cooperar en la lucha contra el terrorismo y la financiación del terrorismo.

47. La República Islámica del Irán había ratificado y enmendado leyes y normativas específicas para mejorar las medidas de lucha contra la financiación del terrorismo de conformidad con las normas internacionales. En 2016, había enmendado la Ley de Lucha contra la Financiación del Terrorismo, enunciando una definición de la financiación del terrorismo y calificándola de delito grave. La definición de actos terroristas tenía los siguientes elementos: cometer o amenazar con cometer un asesinato o un ataque violento que suponga una lesión corporal grave, toma de rehenes y actos de violencia contra personas o que pongan en peligro su vida o su libertad con la intención de influir en las políticas, decisiones y medidas de la República Islámica de Irán, así como de otros Estados u organizaciones

internacionales. En 2018, había modificado la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero para reforzar las actuaciones y los procedimientos de represión.

48. El Código de Procedimiento Penal protegía los derechos de las víctimas, incluido el derecho a un recurso efectivo y a la reparación, teniendo en cuenta al mismo tiempo principios tales como la presunción de inocencia y la no discriminación.

49. La República Islámica del Irán reiteró que el asesinato del General Soleimani había constituido un acto de terrorismo internacional perpetrado por un Estado en violación de los principios fundamentales del derecho internacional y de los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. El 27 de noviembre de 2020, Mohsen Fakhrizade, destacado físico y profesor universitario en Absard, Teherán, había sido también víctima del terrorismo de Estado. Las autoridades competentes estaban investigando y procesando esos dos casos.

50. El 7 de junio de 2017, un grupo de miembros de Dáesh había llevado a cabo atentados terroristas contra el Parlamento de la República Islámica del Irán y el mausoleo del Imán Jomeini, fundador de la República Islámica del Irán. Esos atentados terroristas se habían cobrado 12 vidas y más de 40 civiles habían sufrido heridas. Los implicados en el apoyo, la financiación y la realización de los atentados terroristas habían sido procesados, declarados culpables de delitos relacionados con el terrorismo y condenados a las penas aplicables de acuerdo con la legislación antiterrorista pertinente.

51. La República Islámica del Irán declaró que el grupo terrorista conocido como "MKO" había cometido cientos de actos de terrorismo que se habían cobrado miles de vidas en el curso de los años.

Filipinas

52. Además de la información facilitada anteriormente ([A/75/176](#), párrs. 83 a 87, y [A/76/201](#), párrs. 64 y 65), Filipinas hacía una relación detallada de las medidas adoptadas por las diferentes ramas del Gobierno para eliminar el terrorismo internacional. La Policía Nacional de Filipinas había concertado numerosos memorandos de entendimiento con organismos de países asiáticos vecinos y Estados Miembros de las Naciones Unidas.

53. Filipinas hacía una descripción detallada de las normas y los procedimientos de aplicación de la ley que ponían en práctica el marco jurídico de la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, la Ley contra el Blanqueo de Dinero de 2020 (LR núm. 9160), en su forma enmendada, la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo de 2012 (LR núm. 10168) y la Ley de Gestión del Comercio Estratégico de 2015 (LR núm. 10697) estaban dirigidas a combatir el terrorismo y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva mediante la gestión del comercio de bienes estratégicos.

54. El Consejo contra el Blanqueo de Dinero había emitido las directrices de sanciones de 2020 de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo de 2012 y las resoluciones de aplicación en virtud de la resolución del Consejo contra el Blanqueo de Dinero núm. TF-01 (Al-Qaida) y las resoluciones del Consejo de Seguridad [1267 \(1999\)](#) y [1988 \(2011\)](#), respectivamente.

55. Filipinas había puesto en marcha un plan de acción nacional para prevenir y combatir el extremismo violento.

56. En el ámbito de la cooperación policial, en mayo de 2021, las operaciones conjuntas del Agregado de Policía de Filipinas en Malasia, el Mando Sur de la Policía

Real de Malasia de Sabah Oriental y el Equipo de Tareas Conjunto de las Fuerzas Armadas de Filipinas en Sulu habían culminado en la detención de ocho miembros del Grupo Abu Sayyaf con sede en Sabah Oriental, incluido el líder del grupo, Sansibar Bensio, en Jalan Taman Sri-Arjuna, Beaufort, y Sipitang, Sabah.

Polonia

57. Además de la información facilitada anteriormente ([A/72/111](#), párrs. 43 a 46, y [A/76/201](#), párrs. 66 a 69), Polonia comunicó que había complementado el marco jurídico polaco sobre la lucha contra el terrorismo del que había informado anteriormente.

58. En abril de 2021, la Unión Europea había aprobado el Reglamento (UE) 2021/784 sobre la difusión de contenidos terroristas en línea (Diario Oficial de la Unión Europea L 172/79, 17 de mayo de 2021). El Reglamento era obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros. Las nuevas normas eran aplicables desde el 7 de junio de 2021. La Unión Europea se había propuesto frenar la difusión de propaganda terrorista y abordar la obligación de los proveedores de servicios de alojamiento web de remover con rapidez contenidos terroristas en línea. Teniendo en cuenta la protección de los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, el Reglamento establecía salvaguardias tales como un informe de transparencia obligatorio, la obligación de notificación, mecanismos de reclamación de fácil utilización y recursos legales. Antes del 7 de junio de 2024, la Comisión Europea debería realizar una evaluación del Reglamento y presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea sobre su aplicación.

Portugal

59. Además de la información facilitada anteriormente ([A/75/176](#), párrs. 88 y 89, y [A/76/201](#), párrs. 70 a 73), Portugal comunicó que en una serie de leyes se ponían en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999.

60. El marco jurídico portugués abarcaba, entre otras cosas, lo siguiente: Ley antiterrorista núm. 52/2003, de 22 de agosto de 2003, Ley núm. 65/2003 por la que se aprueba el régimen jurídico de la orden de detención europea, de 23 de agosto de 2003, Ley de Organización de la Investigación Penal, núm. 49/2008, de 27 de agosto de 2008, Ley de Seguridad Interior, núm. 53/2008, de 29 de agosto de 2008, Ley de Lucha contra el Terrorismo, núm. 52/2003, de 22 de agosto de 2003, modificada por la Ley del Régimen Jurídico para Prevenir el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo y Luchar contra ellos, núm. 17/2011, de 3 de mayo de 2011, Ley núm. 60/2015, de 24 de junio de 2015, Ley núm. 11/2019, de 7 de febrero de 2019 y Ley núm. 16/2019, de 14 de febrero de 2019. Además, en virtud de la Ley para Prevenir que se Utilice el Sistema Financiero para el Blanqueo de Dinero o para Financiar el Terrorismo, núm. 58/2020, de 31 de agosto de 2020, se habían enmendado varias leyes, entre ellas la Ley de Medidas de Prevención y Represión para combatir el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, núm. 83/2017, de 18 de agosto de 2017.

61. Portugal destacó la importancia de la cooperación internacional y explicó los procedimientos aplicables a las transacciones sospechosas. También destacó las dificultades que existían al tratar de obtener información para las investigaciones sobre la financiación del terrorismo, especialmente cuando los flujos financieros tenían como destino países extranjeros.

Federación de Rusia

62. Además de la información facilitada anteriormente ([A/74/151](#), párrs. 82 a 91 y [A/75/176](#), párrs. 90 a 95), la Federación de Rusia comunicó que había mejorado periódicamente su marco legislativo y sus prácticas de aplicación de la ley y había estrechado la cooperación con los Estados interesados y las organizaciones internacionales y regionales en materia de lucha contra el terrorismo.

63. Las autoridades rusas habían tomado medidas para mejorar la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra la financiación del terrorismo, en particular a través del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

64. Con respecto a los procesos penales, en 2021 se estaban sustanciando 507 causas penales por delitos de terrorismo: nueve por actos de terrorismo, 131 por facilitación de actividades terroristas, 61 por financiación y organización del terrorismo, 29 por incitación pública al terrorismo, seis por organización de grupos terroristas y participación en ellos, 77 por participación en actividades de organizaciones terroristas, una por toma de rehenes y 55 por organización de grupos armados ilegales y participación en ellos.

65. En 2021, el Servicio Federal de Vigilancia Financiera había identificado a 2.929 personas implicadas en el suministro de recursos a organizaciones terroristas internacionales. En 2021, los organismos encargados de la aplicación de la ley habían incluido a 330 personas buscadas por delitos de terrorismo en la lista de personas buscadas a nivel internacional utilizando los cauces de la Organización Internacional de Policía Criminal.

66. En el ámbito de la cooperación judicial, en 2021, la Fiscalía General había examinado 15 solicitudes de extradición de personas para su procesamiento penal presentadas por otros Estados. De esas 15 solicitudes, siete personas habían sido extraditadas, una solicitud fue rechazada, una extradición había sido aplazada debido a un juicio en curso en la Federación de Rusia y una persona había sido incluida en una lista de personas buscadas. Había cinco solicitudes de extradición en espera de examen.

67. La Fiscalía General había enviado 17 solicitudes de extradición a otros Estados para fines de procesamiento y una solicitud de detención en virtud del artículo 16 del Convenio Europeo de Extradición de 1957. De las 17 solicitudes, se había dado lugar a dos, se habían rechazado seis, se había aplazado una extradición y se había incluido a 18 personas en una lista de personas buscadas. Había 136 solicitudes de extradición y detención pendientes de examen en otros Estados.

San Marino

68. Además de la información facilitada anteriormente ([A/73/125](#), párrs. 39 a 42, [A/74/151](#), párrs. 92 a 94, [A/75/176](#), párrs. 96 a 99, y [A/76/201](#), párrs. 74 y 75), San Marino comunicó que había ratificado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, firmado en San Marino el 31 de marzo de 2022.

69. La Unidad de Inteligencia Financiera de San Marino había suscrito acuerdos de cooperación con 55 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. San Marino también era miembro del Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo y del Grupo Egmont

70. Como había informado anteriormente, San Marino nunca había sido escenario de atentados terroristas ni de su planificación. En San Marino no se había identificado

a ninguna persona, grupo o entidad afiliada a grupos terroristas o implicada en ellos, ni tampoco activos o fondos vinculados al terrorismo.

71. En el ámbito de la cooperación judicial, San Marino había adoptado en septiembre de 2019 una estrategia nacional para la localización, el embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la recuperación de instrumentos y productos del delito. Además, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal, el 19 de mayo de 2021 había logrado la extradición por Bélgica de una persona buscada por los delitos de evasión y daños.

Arabia Saudita

72. Además de la información facilitada anteriormente ([A/76/201](#), párrs. 76 a 80), la Arabia Saudita comunicó que era parte en la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes y en el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves. Había firmado asimismo una serie de acuerdos bilaterales en el ámbito de la cooperación judicial, la ciberseguridad y el intercambio de información.

73. Se habían tomado en la Arabia Saudita medidas legislativas, institucionales, administrativas y de otro tipo destinadas a prevenir y castigar todos los actos y actividades terroristas, así como los actos directa o indirectamente relacionados con ellos, como la financiación del terrorismo, la protección y vigilancia de las fronteras y la cooperación judicial. Además de la ley islámica, la Ley de Crímenes de Terrorismo y su Financiación, promulgada por el Real Decreto M/16, que había entrado en vigor en 2014, y la Ley Antiterrorista, promulgada por el Real Decreto núm. M/21 y puesta en vigor en 2017, habían acentuado más la índole criminal del terrorismo. Arabia Saudita había promulgado una normativa especial relativa a la gestión de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales con el fin de evitar que se utilizaran para actividades delictivas. Por ejemplo, había adoptado medidas para reducir el uso de donaciones en efectivo y prohibido la recaudación de dinero en efectivo en lugares públicos y mezquitas. También había promulgado leyes que tipificaban como delito los daños a la propiedad pública, que podían considerarse actos de terrorismo, y adoptado medidas de seguridad preventivas, como la instalación de cámaras de seguridad. Había aprobado además una ley que obligaba a las compañías aéreas a comunicar con antelación la información relativa a los pasajeros a las autoridades nacionales competentes.

74. La Arabia Saudita destacó la importancia de compartir la información de inteligencia y la de la cooperación internacional. La Arabia Saudita cooperaba activamente con la Organización Internacional de Policía Criminal y el Grupo Egmont. También era miembro de la Coalición Mundial contra Dáesh, del Grupo de Acción Financiera y del Grupo de Trabajo de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre el Registro de Nombres de Pasajeros.

75. La Arabia Saudita había organizado actividades de capacitación sobre la perspectiva de género en la lucha contra el terrorismo. Había venido consolidando las normas para aumentar el número de mujeres que integraban las fuerzas del orden.

Singapur

76. Además de la información facilitada anteriormente ([A/74/151](#), párrs. 99 a 101, [A/75/176](#), párrs. 105 a 107, y [A/76/201](#), párrs. 81 y 82), Singapur comunicó que en 2021 había actualizado su normativa sobre medidas antiterroristas a fin de aclarar que era aplicable también a todas las personas y entidades designadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad.

77. Amirull bin Ali, ciudadano de Singapur, el 31 de marzo de 2021, y Ruqayyah binti Ramli, ciudadano de Singapur, el 1 de octubre de 2021, habían sido añadidos

recientemente a la lista de terroristas en virtud de la Ley de Terrorismo (Represión de la Financiación) de 2002.

78. Desde 2016, Singapur había procesado y condenado a 13 personas por financiación del terrorismo. Desde el informe más reciente del país, en 2021, Mohamed Kazali bin Salleh y Ahmed Faysal habían sido procesados y condenados por delitos en virtud de la Ley de Terrorismo (Represión de la Financiación) de 2002.

Suiza

79. Además de la información facilitada anteriormente ([A/75/176](#), párrs. 115 a 127, y [A/76/201](#), párrs. 83 a 100), Suiza comunicó que en marzo de 2021 había aprobado la Ley Federal de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (RS 955.0). La Ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2022.

80. En 2021, el Ministerio Público Federal había interpuesto 38 causas relacionadas con el terrorismo, que se referían, entre otras cosas, a atentados terroristas, el reclutamiento, la financiación del terrorismo, la propaganda yihadista en Internet y el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Sobre la base de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Federal, el Tribunal Penal Federal había dictado varias sentencias durante el período a que se refería el informe.

81. El Tribunal Penal Federal había declarado culpables a siete personas en cinco causas diferentes de infringir el artículo 2 de la Ley Federal de Proscripción de los Grupos Al-Qaida, Estado Islámico y Organizaciones Asociadas y el artículo 135 del Código Penal y a una persona en otra causa de apoyar a una organización criminal, en contravención del artículo 260 *ter* del Código Penal. Las condenas variaban de multas a penas de hasta cinco años y cinco meses de prisión. Durante el período a que se refería el informe, el Ministerio Público Federal había dictado tres órdenes de sanción sumaria diferentes contra tres personas culpables de infringir el artículo 2 de la Ley Federal de Proscripción de los Grupos Al-Qaida, Estado Islámico y Organizaciones Asociadas. Además, otras 12 causas relacionados con el terrorismo se encontraban en fase de examen o investigación preliminar.

82. El 8 de marzo de 2019, el Consejo Federal había establecido una estrategia que disponía medidas operativas para evitar el regreso no supervisado al país de viajeros suizos con intenciones terroristas. Sin embargo, las autoridades suizas no habían tomado medidas activas para repatriar a los adultos de que se trataba. La repatriación de menores se estudiaría caso por caso, teniendo en cuenta el mejor interés del niño. En 2021, Suiza había repatriado a dos niños que habían sido llevados ilegalmente por su madre a la República Árabe Siria para unirse a Dáesh en 2016.

83. En el ámbito de la cooperación judicial en materia de actos de terrorismo, en 2021 Suiza había recibido 41 solicitudes de asistencia judicial de 15 Estados diferentes. De ellas, se había dado curso a 29, tres habían sido rechazadas y las demás estaban en proceso de ejecución. En el mismo período, las autoridades suizas habían presentado tres solicitudes de asistencia judicial recíproca a otros tantos Estados. Tres de ellas se habían ejecutado. Para mayo de 2022, las autoridades suizas habían recibido tres solicitudes de asistencia judicial recíproca formuladas por cuatro Estados diferentes. De ellas, se había dado curso a tres y las demás estaban en proceso de ejecución.

84. La Secretaría de Estado de Migración había iniciado un procedimiento de revocación de la nacionalidad de siete personas en virtud del artículo 42 de la Ley de Ciudadanía Suiza de 20 de junio de 2014 y del artículo 30 de la Ordenanza de Nacionalidad Suiza de 17 de junio de 2016. En tres de esos casos, la revocación había cobrado carácter ejecutorio, incluida una que había sido confirmada por el Tribunal Supremo Federal (véase la decisión núm. 1C_457/2021 de 25 de marzo de 2022), una

había sido recurrida ante el Tribunal Administrativo Federal, dos casos se habían cerrado y uno suspendido.

85. En 2019, la Oficina Federal de la Policía había dictado dos órdenes de deportación y 65 prohibiciones de ingreso en relación con el terrorismo. En 2021, la Oficina Federal de Justicia no había interpuesto causas de extradición directamente relacionadas con actos de terrorismo.

86. En cuanto a los traslados de personas condenadas, tres personas condenadas por actos terroristas en el extranjero (dos en Marruecos y una en Francia) habían solicitado cumplir sus penas en Suiza; se había rechazado la solicitud de la persona encarcelada en Francia y se estaban evaluando las otras dos.

87. En 2021, intermediarios financieros habían presentado 5.964 informes sobre actividades sospechosas a la Oficina de Notificación sobre Blanqueo de Dinero. De estos informes, 82 (el 1,4 %) se referían a casos de presunta financiación del terrorismo o a contravenciones de la Ley Federal de Proscripción de Al-Qaida, el Estado Islámico y las Organizaciones Asociadas. De los 82 casos de sospechas de financiación del terrorismo o de contravención de la Ley Federal de Proscripción de Al-Qaida, Estado Islámico y Organizaciones Asociadas, 15 habían sido denunciados ante las autoridades de justicia penal. Suiza destacó la importancia que revestían esos informes en razón de sus efectos preventivos.

República Árabe Siria

88. Además de la información facilitada anteriormente ([A/68/180](#), párrs. 73 a 77, [A/69/209](#), párrs. 51 y 52, [A/70/211](#), párrs. 76 y 77, y [A/76/201](#), párrs. 101 y 102), la República Árabe Siria reiteró que se había adherido a diez instrumentos internacionales.

89. La República Árabe Siria comunicó que había concertado varios acuerdos de cooperación judicial, por ejemplo, con la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán. Existían sistemas de alerta temprana que permitían el intercambio de información con otros Estados y había cooperado con Estados árabes y europeos y con organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal.

90. El Ministerio del Interior estaba tomando medidas para evitar la falsificación de documentos de identidad o de viaje. A esos efectos, se habían tomado medidas para promover y agilizar el intercambio de información operativa y la cooperación con otros Estados en virtud de las disposiciones de la Convención Árabe sobre la Represión del Terrorismo.

91. Además, había formulado una serie de recomendaciones para la legislación regional e internacional en materia de lucha contra el terrorismo.

Tailandia

92. Además de la información facilitada anteriormente ([A/75/176](#), párrs. 128 a 130), Tailandia seguía firme en su compromiso de luchar contra el terrorismo, la radicalización, el extremismo violento y la delincuencia transnacional, especialmente en el contexto de los desafíos que planteaba la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

93. Tailandia había presentado un documento de concepto para la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), que había llevado a la aprobación en septiembre de 2021 de un marco conocido como hoja de ruta de cooperación en gestión de fronteras de la ASEAN. El marco constituía un esquema de cooperación integrado y global para la gestión de las fronteras en toda la región e indicaba los

ámbitos prioritarios de cooperación. Además, Tailandia había presentado una declaración conjunta sobre la promoción de la juventud y la agenda de paz y seguridad, que fue aprobada en el vigésimo octavo Foro Regional de la ASEAN en agosto de 2021, y la Declaración de Bandar Seri Begawan sobre la lucha contra la delincuencia transnacional tras la pandemia de COVID-19, que fue aprobada en septiembre de 2021.

94. Al 30 de abril de 2022, había 705 personas incluidas en la lista por estar involucradas en actividades terroristas. Desde la entrada en vigor de la Ley contra la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, BE 2559 (2016), se habían incautado 5.334.898,53 baht en activos y propiedades.

95. El 4 de abril de 2022, el Consejo de Seguridad Nacional había aprobado la primera directriz nacional sobre el fortalecimiento de la convivencia en medio de la diversidad social para prevenir y combatir el extremismo violento. Además, Tailandia había revisado su plan de acción antiterrorista 2023-2027, destacando la importancia de la cooperación interinstitucional y el compromiso de las múltiples partes interesadas de combatir el terrorismo.

Türkiye

96. Además de la información facilitada anteriormente ([A/60/228](#), párrs. 83 a 87, [A/73/125](#), párrs. 54 a 56, [A/75/176](#), párrs. 131 a 134, y [A/76/201](#), párr. 103), Türkiye comunicó que su legislación reflejaba su compromiso político de mejorar sus normas relativas a las medidas de lucha contra el terrorismo y de cumplir las normas del Grupo de Acción Financiera.

97. En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera había firmado varios memorandos de entendimiento bilaterales relacionados con la financiación del terrorismo con las autoridades correspondientes de China y Hong Kong, China, los Emiratos Árabes Unidos, el Iraq, Libia y Malta.

98. Türkiye indicó que había reformado su legislación nacional en materia de financiación del terrorismo. El 17 de julio de 2021, había promulgado una estrategia nacional a través de la Circular Presidencial núm. 2021/16 sobre la investigación más eficaz de los delitos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. El 31 de diciembre de 2020, había aprobado la Ley núm. 7262 sobre la Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley núm. 7262) y en febrero de 2021 había adoptado legislación secundaria sobre la financiación del terrorismo.

99. Las designaciones en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad se habían llevado sistemáticamente a la práctica. Con arreglo a la resolución [1373 \(2001\)](#) del Consejo de Seguridad, 1.155 personas físicas y 16 personas jurídicas habían sido objeto de disposiciones de congelación y confiscación de activos. En virtud de solicitudes de otros países, otras 40 personas físicas y ocho personas jurídicas habían sido objeto de congelación de activos. Türkiye había seguido recurriendo efectivamente al Grupo Egmont para el intercambio de información y la cooperación en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Ucrania

100. Además de la información facilitada anteriormente ([A/73/125](#), párrs. 57 a 59, [A/74/151](#), párrs. 118 a 120, [A/75/176](#), párrs. 135 a 139, y [A/76/201](#), párrs. 109 a 113), Ucrania comunicó que había enmendado la Ley sobre el Servicio de Seguridad de Ucrania, estableciendo nuevos procedimientos para la elaboración de listas de personas y entidades terroristas y la aplicación de sanciones. Estaba además examinando otros proyectos de ley sobre la lucha contra el terrorismo.

101. De 2014 a 2021, el Servicio de Seguridad de Ucrania había identificado a 171 personas (27 en 2021) involucradas en actividades de organizaciones terroristas internacionales; expulsado del país o devuelto por la fuerza de 98 miembros a organizaciones terroristas internacionales; identificado y detenido a 39 combatientes terroristas extranjeros que figuraban en la lista de búsqueda internacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (de ellos, se estaba sustanciando un procedimiento de extradición); incoado procedimientos penales por crímenes relacionados con el terrorismo contra 34 miembros de organizaciones terroristas internacionales y prohibido que 2.789 (601 en 2021) combatientes terroristas extranjeros ingresaran en territorio de Ucrania. Asimismo, había calificado a seis personas de sospechosas de delitos de terrorismo en virtud del artículo 258 del Código Penal de Ucrania y a 30 personas en virtud del artículo 258-3. Un total de 16 personas habían sido condenadas.

102. Además, el Servicio de Seguridad de Ucrania había declarado a dos personas culpables de delitos relacionados con el terrorismo en el contexto del atentado terrorista cometido en Kiev en 2019. Ambos individuos habían sido condenados a cinco años de prisión, con un período de libertad condicional de tres años cada uno.

103. En 2021, los organismos de la fiscalía en Ucrania habían impartido orientación procesal en el curso de las investigaciones prejudiciales en 913 causas penales relacionadas con actividades terroristas o de financiación del terrorismo. De ellas, se habían incoado 135 procedimientos penales ante los tribunales ucranianos.

B. Información recibida de organizaciones internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

104. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reiteró la información contenida en el informe anterior ([A/74/151](#), párr. 125, [A/75/176](#) párr. 146, y [A/76/201](#), párr. 114).

Organización de Aviación Civil Internacional

105. Además de la información facilitada anteriormente ([A/75/176](#), párrs. 140 a 145), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) comunicó que, al 1 de mayo de 2022, había 187 partes en el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves (firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963); 185 partes en el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970); 188 partes en el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil (firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971); 176 partes en el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional (firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988); 156 partes en el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (firmado en Montreal el 1 de marzo de 1991); 43 partes en el Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (firmado en Beijing el 10 de septiembre de 2010); 43 partes en el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional (firmado en Beijing el 10 de septiembre de 2010) y 37 partes en el Protocolo que modifica el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves (firmado en Montreal el 4 de abril de 2014).

106. En febrero de 2022, la OACI y la Oficina de Lucha contra el Terrorismo habían firmado un nuevo acuerdo para seguir avanzando en la cooperación conjunta contra el terrorismo. El Consejo de la OACI había adoptado la enmienda 18, con

procedimientos de seguridad revisados, al anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (firmado en Chicago en 1944), relativo a la seguridad de la aviación. La enmienda entraría en vigor el 18 de noviembre de 2022. El 28 de febrero de 2021 había entrado en vigor la enmienda 28 del anexo 9, relativa a la facilitación. La enmienda había introducido normas y prácticas recomendadas nuevas y actualizadas sobre los registros de nombres de pasajeros en atención a la resolución [2396 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad.

107. Aunque el número de actos ilícitos había sido relativamente bajo en 2020, debido a la reducción global del tráfico, la reanudación constante de los vuelos ha coincidido con un recrudecimiento de los incidentes. En 2021, la secretaría había registrado 40 actos de injerencia ilícita, que incluían 3 atentados contra aeronaves en vuelo, 8 atentados contra instalaciones de aviación o en ellos, 7 apoderamientos ilegales de aeronaves, 5 ciberataques y 17 actos clasificados como "otros". La OACI había venido publicando periódicamente, en su Declaración del contexto mundial de riesgo para la seguridad de la aviación, información sobre los actos ilícitos con el fin de proporcionar a los Estados la información más pertinente sobre el entorno de amenazas y riesgos. Estaba previsto que la tercera edición se publicase en inglés en septiembre de 2022 y posteriormente en otros idiomas.

108. En el contexto del enfoque de supervisión continua del Programa Universal de Trille la OACI de auditoría de la seguridad de la aviación se había previsto hacer auditorías en 30 Estados en 2022.

109. La OACI había formulado las siguientes mejores prácticas y orientaciones nuevas y actualizadas: orientaciones sobre la cultura de la seguridad, orientaciones sobre el protocolo del semáforo, orientaciones sobre la política de ciberseguridad y orientaciones sobre la cultura de la ciberseguridad en la aviación civil. El material revisado sería incorporado a la próxima 13ª edición del Manual de Seguridad Aérea y publicado a fines de 2022.

110. La OACI había seguido organizando diversas actividades de creación de capacidad y proporcionando asistencia técnica a los Estados miembros de forma *ad hoc* y mediante planes de mejoramiento de la seguridad aérea. A este respecto, tras el éxito de la experiencia de un proyecto piloto, el Programa de las Naciones Unidas sobre Modelos de Evaluación de Amenazas para la Seguridad de la Aviación, con el Gobierno de Botswana, la OACI estaba dispuesta a prestar apoyo para la aplicación del Programa en Nigeria y Filipinas y, en el futuro, a ampliarlo.

Organismo Internacional de Energía Atómica

111. Además de la información facilitada anteriormente ([A/75/176](#), párrs. 147 a 151, y [A/76/201](#), párrs. 115 a 117), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó que, en su 65ª reunión ordinaria, celebrada en septiembre de 2021, la Conferencia General había aprobado una resolución sobre seguridad nuclear con un texto similar al de la resolución que había anteriormente comunicado y descrito. El Organismo había seguido promoviendo la adhesión universal a la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. También había seguido apoyando activamente los preparativos de la Conferencia de las Partes de la Enmienda de la Convención. A este respecto, el Director General del OIEA, en su carácter de depositario, había convocado la Conferencia de las Partes del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 en la sede del OIEA en Viena. La Conferencia había examinado la forma en que se había aplicado la Convención en su forma enmendada y si era suficiente en vista de la actual situación mundial. A 1 de abril de 2022, había 164 partes en la Convención, de las cuales 129 se habían adherido también a la Enmienda de la Convención.

112. En 2022 el OIEA celebró en su sede su primera Conferencia Internacional sobre Derecho Nuclear, con el tema "El debate mundial". Los participantes examinaron asuntos relacionados con el ámbito de la Convención y su Enmienda e intercambiaron experiencias y enseñanzas extraídas con respecto al cumplimiento de los compromisos y las obligaciones que imponía. En la reunión se abordó, entre otros temas, el papel de los puntos de contacto nacionales y de las autoridades competentes en relación con las cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Convención y de su Enmienda, así como la obligación de facilitar información sobre la normativa de aplicación de la Convención, de conformidad con su artículo 14.1.

113. El Organismo había seguido prestando asistencia legislativa a sus Estados miembros de manera integral, entre otras cosas, en lo que se refería a la adhesión y la aplicación efectiva de la Convención y su Enmienda. Se había prestado asistencia por medio de talleres y reuniones y cursos de orientación y formación sobre la formulación y revisión de la legislación nacional y sobre la adhesión a los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y su puesta en práctica. Siete Estados miembros habían recibido asistencia legislativa específica para sus proyectos de legislación nuclear nacional. Debido a las restricciones relacionadas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el OIEA había celebrado varios talleres virtuales y actividades virtuales sobre diferentes aspectos del derecho nuclear.

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

114. Además de la información facilitada anteriormente ([A/71/182](#), párrs. 85 a 89, y [A/76/201](#), párrs. 124 a 126), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) comunicó que había venido trabajando con Estados partes, incluso mediante programas de formación nacionales y regionales, a fin de que se promulgara en el derecho interno legislación que incorporara la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

115. En septiembre de 2021, 118 de los 193 Estados partes en la Convención informaron de que habían promulgado un marco legislativo que incluía todas las medidas iniciales requeridas como parte del proceso de aplicación nacional. Un total de 40 Estados partes informaron de que habían promulgado legislación que abarcaba sólo una parte de las medidas iniciales y los 35 Estados partes restantes aún no habían informado sobre la adopción de legislación.

116. En el curso de 2021, la OPAQ había seguido organizando eventos de creación de capacidad y proporcionando asistencia legislativa a los Estados miembros, así como haciendo que se tomara conciencia de la importancia de adoptar una normativa nacional. En 2021, la OPAQ había organizado 35 eventos de creación de capacidad y 20 cursos de formación, además de una serie de talleres. Durante el período a que se refería el informe, más de 650 participantes de Estados miembros habían asistido a esos eventos. En junio de 2021, la secretaría había publicado unas directrices indicativas para la seguridad química en las pequeñas y medianas empresas con el fin de fomentar los usos pacíficos de la química y había contribuido a la elaboración y publicación de *A Prosecutor's Guide to Chemical and Biological Crimes* (Guía del fiscal para los delitos químicos y biológicos), publicada por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia en mayo de 2022.

117. La OPAQ había puesto en marcha la tercera fase del proyecto titulado Interoperabilidad eficaz interinstitucional y comunicación coordinada en caso de que se produzcan ataques biológicos o químicos y colabora estrechamente con la Organización Mundial de Aduanas para evitar el movimiento ilícito de sustancias químicas peligrosas especialmente propensas a ser utilizadas de forma indebida.

Consejo de Europa

118. Además de la información facilitada anteriormente (A/75/176, párrs. 156 y 157), el Consejo de Europa comunicó que, al 11 de marzo de 2022, el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo de 2005 había recibido 43 ratificaciones y su Protocolo Adicional de 2015 había recibido 24. El seguimiento de la aplicación de ambos tratados estaba a cargo de la Conferencia de las Partes, compuesta de las partes y los signatarios del Convenio y su Protocolo Adicional, así como otros Estados miembros y observadores del Consejo de Europa.

119. A pesar de los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), en 2021 el Comité de Ministros había adoptado los siguientes instrumentos preparados y aprobados por el Comité Directivo del Consejo de Europa de la Lucha contra el Terrorismo: directivas para los Estados miembros sobre los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y una recomendación a los Estados miembros sobre las medidas destinadas a proteger a los niños contra la radicalización con fines terroristas.

120. Por otra parte, el Comité Directivo de la Lucha contra el Terrorismo había aprobado un proyecto de recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la utilización de la información recogida en las zonas de conflicto como prueba en los procedimientos penales relacionados con los delitos de terrorismo, que estaba pendiente de aprobación a nivel del Comité de Ministros debido a la objeción de un Estado miembro, y un proyecto de recomendación sobre la evaluación del riesgo de las personas acusadas y condenadas por delitos de terrorismo, que se esperaba que fuera aprobado por el Comité de Ministros en el primer trimestre de 2022.

121. En el mismo período, el Comité Directivo de la Lucha contra el Terrorismo había avanzado con la preparación del informe sobre las nuevas amenazas terroristas en Europa e iniciado un estudio comparativo de las prácticas nacionales en materia de desradicalización, desvinculación y reinserción social, que debería servir de recurso a los miembros del Comité Directivo para formular o adaptar su labor en este ámbito.

122. Además de celebrar sus sesiones plenarias periódicas, en 2021 el Comité Directivo de la Lucha contra el Terrorismo había organizado tres eventos con el apoyo de organizaciones asociadas, entre ellas la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo: el simposio internacional sobre el apoyo a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas, celebrado el 14 de abril; la conferencia sobre desradicalización en las prisiones, celebrada el 17 de mayo, y la conferencia internacional sobre el papel de las mujeres y los niños en el terrorismo, celebrada los días 15 y 16 de diciembre. Los tres eventos habían servido de plataforma para hacer un balance de la labor realizada hasta la fecha en atención a las necesidades de las víctimas del terrorismo en el extranjero y al aumento de la radicalización y el reclutamiento de reclusos, mujeres y niños por parte de las organizaciones terroristas y para debatir posibles medidas futuras en esos dos ámbitos a nivel regional y nacional. Por último, el Consejo de Europa reiteró su compromiso con el objetivo de las Naciones Unidas de eliminar el terrorismo internacional en todas sus formas y manifestaciones.

III. Instrumentos jurídicos internacionales relacionados con la prevención y represión del terrorismo internacional

123. Actualmente existen 55 instrumentos relativos al terrorismo internacional. De ellos, 19 son de ámbito universal y 36 de ámbito regional. La cuarta edición del

compendio de instrumentos internacionales relativos a la prevención y represión del terrorismo internacional (vols. 1 y 2) se ha publicado en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

A. Instrumentos universales

Naciones Unidas

Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, 1973

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, 1979

Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, 1997

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 1999

Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, 2005

Organismo Internacional de Energía Atómica

Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 1979

Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 2005

Organización de Aviación Civil Internacional

Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, 1963

Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, 1970

Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, 2010

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, 1971

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, Complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, 1988

Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, 1991

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional, 2010

Protocolo que modifica el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, 2014

Organización Marítima Internacional

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, 1988

Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, 1988

Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental

B. Instrumentos regionales

Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC)

Convención Regional de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional sobre la Represión del Terrorismo, 1987

Convención Regional de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional sobre la Represión del Terrorismo, 2004

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental

Convención de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental sobre la Lucha contra el Terrorismo, 2007

Comunidad Económica y Monetaria de África Central

Reglamento núm. 08/05-UEAC-057-CM-13 relativo a la adopción de la Convención relativa a la Lucha contra el Terrorismo en África Central, 2005

Comunidad de Estados Independientes

Tratado de Cooperación entre los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes para Combatir el Terrorismo, 1999

Protocolo por el que se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento para Organizar y Realizar Actividades Conjuntas de Lucha contra el Terrorismo en el Territorio de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 2002

Tratado de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes relativo a la Lucha contra la Legalización (Blanqueo) del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo, 2007

Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo

Convenio del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo sobre la Lucha contra el Terrorismo, 2004

Consejo de Europa

Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, 1977

Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, 2003

Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, 2005

Convenio del Consejo de Europa Relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo, 2005

Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, 2015

Convenio Europeo sobre las Infracciones relativas a los Bienes Culturales, 2017

Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Acuerdo sobre el Grupo Euroasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, 2011

Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial

Convenio sobre la Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo Internacional, la Delincuencia Organizada Transnacional y el Tráfico Ilícito de Drogas, 2009

Liga de los Estados Árabes

Convención Árabe sobre la Represión del Terrorismo, 1998

Enmienda de 2008 a la Convención Árabe sobre la Represión del Terrorismo

Convención Árabe sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, 2010

Convención Árabe sobre la Lucha contra los Delitos relativos a la Tecnología de la Información, 2010

Organización de Cooperación de Shanghái

Convención de Shanghái para la Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo, 2001

Acuerdo sobre el procedimiento para organizar y realizar actividades conjuntas de lucha contra el terrorismo en el territorio de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, 2006

Acuerdo de cooperación para detectar y bloquear las vías de entrada a los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái de las personas implicadas en actividades terroristas, separatistas y extremistas, 2006

Acuerdo sobre el procedimiento para que los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái organicen y realicen ejercicios conjuntos de lucha contra el terrorismo, 2008

Acuerdo de cooperación entre los Gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái para la lucha contra el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, 2008

Acuerdo relativo a la capacitación de personal para las unidades de lucha contra el terrorismo de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, 2009

Convención de la Organización de Cooperación de Shanghái contra el Terrorismo, 2009

Convención de la Organización de Cooperación de Shanghái para la Lucha contra el Extremismo, 2017

Organización de Cooperación Económica del Mar Negro

Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro sobre Cooperación en la Lucha contra la Delincuencia, en particular la Delincuencia Organizada, relativo a la Lucha contra el Terrorismo, 2004

Organización de Cooperación Islámica

Convenio de la Organización de la Conferencia Islámica para la Lucha contra el Terrorismo Internacional, 1999

Organización de los Estados Americanos

Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando Estos Tengan Trascendencia Internacional, 1971

Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva

Acuerdo relativo a Fuerzas Colectivas de Respuesta Rápida de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, 2009

Unión Africana

Convención de la Organización de la Unidad Africana sobre la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo, 1999

Protocolo de la Convención de la Organización de la Unidad Africana sobre la Prevención del Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo, 1999

Unión Europea

Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, 2005
